

Precisión sobre informe

En la mira de la ONU los DD.HH. en Venezuela

Yovanny Bermúdez, s.j.*



CIVILIS DERECHOS HUMANOS

Pese a que el Gobierno venezolano se rehusara a otorgar el permiso de ingreso al país del ACNUDH, se logró documentar una serie de denuncias de violación de DD.HH. centrando su atención en las dificultades para el acceso a la alimentación y medicinas, corrupción y aumento de la pobreza,

la ruptura del Estado de derecho, crisis migratoria, y las reacciones de la comunidad internacional. Así mismo, el informe ofrece una serie de recomendaciones al Estado con el objetivo de abordar las violaciones a los DD.HH. y la prevención de las mismas



PANORAMA

n junio pasado la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) publicó el informe *Violaciones de los Derechos Humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente que no parece tener fin*¹, en el cual se analiza el respeto de los DD.HH. en el país, como también la falta de voluntad política, para subsanar la violación sistemática de los mismos. El objetivo del informe fue documentar las graves violaciones de los DD.HH. en Venezuela y contribuir a la implementación de medidas efectivas de reparación e impedir su repetición.²

El Informe ACNUDH de junio 2018 tiene como fundamento el informe presentado en el mes de agosto de 2017 titulado *Violaciones y abusos de los DD.HH. en el contexto de las protestas en la República Bolivariana de Venezuela del 1 de abril al 31 de julio de 2017*. Este informe tuvo como objetivo “documentar e informar sobre las violaciones de los derechos humanos, en el contexto de las protestas masivas en la República Bolivariana de Venezuela ocurridas entre el 1 de abril y el 31 de julio de 2017”³. Las conclusiones fueron⁴:

- Situación de los DD.HH. cada vez más crítica desde el comienzo de las protestas, en la que se observan niveles cada vez más altos de represión de la oposición política por parte de las fuerzas de seguridad nacionales y un

aumento de la estigmatización y persecución de las personas percibidas como opositoras al gobierno del presidente Maduro.

- Existencia de violaciones generalizadas de los DD.HH. por parte de las autoridades nacionales en el contexto de las manifestaciones realizadas en todo el país, violaciones que tienen por objeto frenar cualquier tipo de protesta contra el Gobierno.
- Se constató que las fuerzas de seguridad han utilizado sistemáticamente fuerza excesiva y realizado detenciones arbitrarias de las personas que participan en manifestaciones.
- Existencia de patrones de malos tratos, que en ocasiones podrían llegar a constituir tortura, malos tratos y violaciones graves del derecho al debido proceso por parte de las autoridades venezolanas en perjuicio de las personas detenidas en relación con las protestas.

Es importante destacar que el Gobierno venezolano no otorgó el permiso de ingreso al país del ACNUDH, por lo cual dicho organismo optó por búsqueda de medidas alternas para documentar las denuncias de violación de DD.HH. Dicho Informe se elaboró en conformidad con el mandato del Alto Comisionado en virtud de la Resolución 48/141 de la Asamblea General de las Naciones Unidas⁵.

A continuación se presentan los elementos fundamentales que argumentan, según el ACNUDH, la violación de DD.HH. en Venezuela.

QUÉ EXAMINA EL INFORME

El Informe examina “diversas cuestiones sobre la responsabilidad y rendición de cuentas, así como sobre el acceso a la justicia para las víctimas y sus familiares en caso de violaciones graves de los DD.HH.”⁶. Además documenta: a) violaciones de los DD.HH. cometidos por las autoridades estatales desde agosto de 2017 como el uso excesivo de la fuerza en operaciones de seguridad no relacionadas con las protestas, la práctica reiterada de las detenciones arbitrarias, la tortura y los malos tratos, y la vulneración de los derechos al disfrute del más alto nivel posible de salud y a una alimentación adecuada, y b) otras violaciones de DD.HH., como las ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, cometidas por las autoridades estatales desde 2014.⁷

El primer asunto a mencionar es la gestión realizada por ACNUDH, en fecha 8 de marzo de 2018, con el fin de tener permiso del Estado venezolano para ingresar al país y realizar las debidas investigaciones sobre la violación o no de DD.HH., consolidar las relaciones de trabajo con el Gobierno y otros interlocutores y explorar las posibilidades de cooperación técnica.

La siguiente cuestión es si ACNUDH tenía o no facultad para realizar un informe de un país miembro de la ONU sin los debidos permisos del Gobierno implicado. A tal asunto el ACNUDH respondió que tiene facultad en función de las obligaciones jurídicas vinculantes del país en materia de DD.HH. En este sentido el Gobierno venezolano respondió a través de un comunicado de la Cancillería que “se trata de un informe sobre un Estado miembro de la ONU, sin contar con mandato expreso del Consejo de DD.HH. o la Asamblea General. Por tanto, el referido documento constituye un acto arbitrario que vulnera las propias normas de funcionamiento de la Oficina y usurpa las atribuciones que corresponden a otros órganos de la ONU”⁸. Además, se señala al Alto Comisionado de guardar silencio frente al negativo impacto en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) generado por las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el Gobierno de EE.UU. y sus serviles aliados en la región y en el mundo.⁹ Mientras el Gobierno venezolano rechaza el Informe, Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de los DD.HH., consideró que los espacios democráticos se han cerrado en Venezuela y llamó al Consejo de DD.HH. a que establezca una comisión internacional de alto nivel que investigue los presuntos atropellos a las garantías fundamentales cometidos en ese país.¹⁰

CÓMO SE HIZO EL INFORME

El primer asunto a mencionar es la gestión realizada por ACNUDH, en fecha 8 de marzo de 2018, con el fin de tener permiso del Estado venezolano para ingresar al país y realizar las debidas investigaciones sobre la violación o no de DD.HH., consolidar las relaciones de trabajo con el Gobierno y otros interlocutores y explorar las posibilidades de cooperación técnica. Y, en cartas del ACNUDH, de fechas 20 de marzo y 23 de abril de 2018, le pide a la Misión Permanente de Venezuela en Ginebra, información concreta sobre la situación de los DD.HH. en el país. El 2 de mayo, respondiendo a las cartas de fechas 8 y 20 de marzo, la Misión Permanente cuestionó si el Alto Comisionado tenía el mandato de emitir un informe público a falta de una solicitud del Consejo de DD.HH.¹¹

El Informe de junio 2018 fue preparado con un total de 150 entrevistas y re-

uniones con grupos de personas de diferentes partes del país y de diversos sectores sociales. Las entrevistas fueron realizadas utilizando tecnologías de Internet para conectarse con los entrevistados en el país o en otros países. También hubo reuniones en Ginebra. Cabe destacar que ACNUDH tomó todas las medidas posibles para resguardar y proteger la identidad de las personas entrevistadas, además actuó con las debidas diligencias para evaluar y confirmar la información recogida, y así garantizar la credibilidad y fiabilidad del Informe. El ACNUDH también utilizó fuentes secundarias como: información oficial, documentos jurídicos, informes médicos y forenses, videos, fotografías, material de medios de comunicación tradicionales y redes sociales, así como informes de organizaciones no gubernamentales (ONG) nacionales e internacionales y de organizaciones internacionales, incluso agencias de las Naciones Unidas.¹²

El Gobierno venezolano fue tajante al rechazar el Informe sobre la situación de los DD.HH. en el país, así como la metodología utilizada porque “sepulta la credibilidad y rigor técnico exigido a una Oficina de esa naturaleza y vulnera los principios de objetividad, imparcialidad y no selectividad”¹³. Y, el representante de Venezuela en Ginebra, Jorge Valero, respondió que dicho Informe refleja un marcado sesgo político, además de violar “los principios de soberanía, integridad territorial y no injerencia en los asuntos internos de los estados, [y] el alto comisionado insiste en presentar un falso clima de tensión en nuestro país, la verdad es que Venezuela continúa en paz su camino democrático”¹⁴.

A lo anterior debe sumarse, y en estrecha relación con la postura del Gobierno venezolano, que Alfred de Zayas, asesor independiente del ACNUDH, declaró que el Alto Comisionado no mostró neutralidad ni objetividad, y que los responsables de redactar el informe final omitieron las referencias que él mismo realizó en el informe del mismo ente en el año 2017¹⁵. De Zayas también denunció que en el 2017 “tanto la oficina y una serie de organizaciones no gubernamentales [...] querían de mí, era una sola cosa, que yo condenase al Gobierno y que yo confirmase que había una crisis humanitaria”¹⁶.

La crisis migratoria no solo deja al descubierto la grave crisis nacional, sino también la grave situación de los venezolanos en el extranjero que se encuentran en situación irregular dejándolos expuestos a la explotación, la extorsión, la violencia sexual y de género, la trata de personas, la integración forzada a grupos delictivos, la discriminación y la xenofobia.

EL CONTEXTO

En la crisis económica y social el Informe expone que las condiciones de vida se siguen deteriorando desde agosto de 2017. Con un país en recesión económica, con hiperinflación y aumento de la pobreza, el deterioro es estrepitoso. También se reconoce que el Gobierno nacional ha ido implementando varias políticas con el fin de frenar la inflación y atraer las inversiones: reforma monetaria y la introducción de la criptomoneda. Ahora bien, poco han dado resultado entre otras cosas por la drástica disminución en la producción petrolera y la depreciación continua de la moneda, lo cual ha puesto al Gobierno al borde del incumplimiento en los pagos de la deuda externa. El mencionado deterioro también se agudiza porque las instituciones gubernamentales no están respondiendo ni eficaz ni eficientemente a la prestación de servicios básicos fundamentales como: electricidad, agua y saneamiento, transporte público, y la escasez generalizada de alimentos y medicinas. Dice el Informe que el Gobierno nacional, según sus propias declaraciones, destina el 70 % del presupuesto del Estado al gasto social especialmente para la distribución de alimentos a través de las cajas de comida CLAP, aunque el acceso a los programas sociales está mediado por la posesión del *carnet de la patria* . Además menciona que la corrupción es una de las causas de la actual crisis alimentaria y de salud en el país.

En lo referente a la crisis política institucional el Informe hace eco de la persistente erosión del Estado de derecho con el desmantelamiento de los contrapesos esenciales del sistema democrático. No se puede olvidar que desde agosto de 2017 todos los poderes públicos se hallan supeditados a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC); de hecho, esta ha nombrado a altos funcionarios como el fiscal general y el defensor del pueblo. A la crisis del Estado de derecho se suma la falta de información oficial sobre indicadores fundamentales en materia de DD.HH., de salud, tasa de homicidios, inflación, PIB. Otro aspecto significativo tiene que ver con el proceso de negociaciones y diálogo entre el Gobierno y ciertos partidos de la oposición que no llevó a ningún acuerdo. Y el otro asunto tiene que ver con las elecciones presidenciales que dieron como ganador a Nicolás Maduro, además de describir

las irregularidades observadas antes y durante dicho proceso electoral.

La crisis migratoria es considerada como el reflejo más crudo del colapso socioeconómico y de los DD.HH. en el país. Se reconoce el aumento en 2.000 %, desde 2014, de las solicitudes de asilo y aunque, según el Acnur, no todos los venezolanos que migran del país pueden ser considerados refugiados a tenor de la convención y protocolo sobre la materia, sí se considera que un número significativo de venezolanos que han abandonado el país necesitan de protección internacional. Comenta el Acnur que las causas que empujan a los venezolanos a dejar el país son: "Amenazas concretas proferidas por grupos armados; el miedo a encontrarse en el punto de mira debido a sus opiniones políticas; las amenazas y la extorsión; las altas tasas de delincuencia; la violencia doméstica; la inseguridad alimentaria; y la imposibilidad de acceder a atención médica adecuada, medicamentos y servicios básicos"¹⁷. La crisis migratoria no solo deja al descubierto la grave crisis nacional, sino también la grave situación de los venezolanos en el extranjero que se encuentran en situación irregular dejándolos expuestos a la explotación, la extorsión, la violencia sexual y de género, la trata de personas, la integración forzada a grupos delictivos, la discriminación y la xenofobia.

Violaciones de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente que no parece tener fin



 **NACIONES UNIDAS**
DERECHOS HUMANOS
OFICINA DEL ALTO COMISIONADO

FORO PENAL

Como puede observarse el ACNUDH centra su atención en lo económico: en las dificultades para el acceso a la alimentación y las medicinas, la corrupción, el aumento de la pobreza. En lo político hace hincapié en la ruptura del Estado de derecho. Con la crisis migratoria se eleva la preocupación a las carencias en los sistemas de protección internacional para atender el flujo migratorio de venezolanos.

El Informe refiere cómo ha sido la respuesta de la comunidad internacional a propósito de la situación en Venezuela. Se menciona el impacto de las sanciones a funcionarios y figuras prominentes relacionadas con el Gobierno venezolano. Dichas sanciones comprenden: prohibición de viajar a los países sancionadores, congelación de activos, embargo de armas y materiales que podrían ser utilizados con fines de represión. En el caso del Gobierno norteamericano también se prohibió que cualquier ciudadano de ese país o alguna persona que residiera en EE.UU. pudiera realizar transacciones relacionadas con la refinanciación de la deuda o los bonos del Gobierno de Venezuela y de Pdvsa.¹⁸

En el Informe se menciona que el argumento gubernamental de que la crisis económica obedece al bloqueo económico de los EE.UU. queda en entredicho, porque señala que dicha crisis se viene arrastrando desde antes de la aplicación de las sanciones. Como parte de las medidas ejercidas por la comunidad internacional se menciona la apertura, por parte de la fiscal de la Corte Penal Internacional, de un examen preliminar para analizar los supuestos casos de crímenes de lesa humanidad cometidos en el país en el contexto de las protestas y la agitación política desde, al menos, el mes de abril de 2017. En ese mismo tenor, en el mes de mayo, la Organización de los Estados Americanos (OEA) publicó un informe elaborado por un grupo de expertos independientes sobre la posible comisión de delitos de lesa humanidad en Venezuela. Y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en marzo de este año, decidió nombrar una comisión experta para verificar las denuncias de incumplimiento por parte del Gobierno venezolano de las convenciones sobre la libertad sindical, la consulta tripartita y la fijación de salarios mínimos.

Como puede observarse el ACNUDH centra su atención en lo económico: en las dificultades para el acceso a la alimentación y las medicinas, la corrupción, el aumento de la pobreza. En lo político hace hincapié en la ruptura del Estado de derecho. Con la crisis migratoria se eleva la preocupación a las carencias en los sistemas de protección internacional para atender el flujo migratorio de venezolanos. Y en lo referido a la reacción de la comunidad internacional frente a la situación en el país

comenta el proceso de sanciones implementado por distintos países.

A continuación se hace referencia a los distintos hallazgos que, según el ACNUDH, pueden considerarse como violaciones a los DD.HH.

LOS HALLAZGOS

Los hallazgos encontrados por el ACNUDH le llevan a decir que “las violaciones de los DD.HH. cometidas durante las manifestaciones forman parte de un sistema más amplio de represión contra los disidentes políticos y contra cualquier persona que, a juicio de las autoridades, se oponga al Gobierno o represente una amenaza para éste”¹⁹.

VIOLACIONES A LA LIBERTAD DE REUNIÓN PACÍFICA

A nivel general el Informe relata que las autoridades venezolanas sistemáticamente han infringido el derecho de reunión pacífica. El ACNUDH observó un cambio en el patrón de las protestas. Los motivos de estas, en un primer momento pidiendo cambios políticos, se transformaron a protestas con demandas sociales y económicas. Por ejemplo, el 85 % de las protestas ocurridas en el primer cuatrimestre del año tuvieron como puntos de reclamos: mejoría en los derechos laborales y el acceso a alimentos, medicamentos, atención médica y otros servicios básicos como electricidad, agua potable y gas doméstico. Estas movilizaciones reivindicativas de derechos han sido más intensas en los sectores pobres del país.

Para el ACNUDH la violación del derecho a la reunión pacífica puede observarse en que las autoridades estatales, especialmente la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), y los colectivos armados, han impedido el pleno ejercicio del mencionado derecho a través del ejercicio de la fuerza desproporcionada, y con las detenciones arbitrarias. A lo anterior se suma la criminalización de la reunión pacífica a través de la creación de leyes y reglamentos que imponen restricciones y ciertas condiciones para la autorización de dichas protestas. Y en ese mismo orden de ideas hubo por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una decisión de ordenar a ciertos alcaldes impedir las congregaciones de personas en zonas públicas que pudieran interferir la libertad de movimiento, y la ANC estableció otra restricción a la libertad de reunión

Al mismo tiempo, el Fiscal General desmanteló la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales, creada en 2014 para recolectar pruebas forenses en los casos en que miembros de las fuerzas de seguridad fueran acusados de haber cometido violaciones de los derechos humanos. La directora de esa unidad y varios de sus expertos forenses huyeron del país tras recibir amenazas de muerte.

pacífica con la promulgación de la ley contra el odio.

VIOLACIONES A LOS DERECHOS A LA VERDAD Y LA JUSTICIA DE LOS FAMILIARES DE LAS PERSONAS MUERTAS DURANTE LAS PROTESTAS

Según los testimonios recopilados por ACNUDH, las familias de las personas que murieron durante las protestas no han podido ejercer el derecho a la verdad, la justicia y la reparación, y se menciona que “las autoridades no han actuado con la debida diligencia de conformidad con la obligación internacional de realizar una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial sobre la muerte de los manifestantes, y de castigar a los presuntos perpetradores”²⁰. En el Informe se reconoce que²¹:

En su informe de 2017, el ACNUDH determinó que los agentes de seguridad habían sido los presuntos responsables de la muerte de 46 manifestantes. Al 31 de julio de 2017, el Ministerio Público había emitido por lo menos 54 órdenes de detención contra los agentes de seguridad presuntamente implicados en 17 de estas muertes. Sin embargo, más de un año después del comienzo de la ola de protestas, sólo se ha iniciado la etapa formal de juicio en el caso de un policía municipal acusado de matar a César Pereira el 27 de mayo de 2017 en el estado de Anzoátegui.

Y los familiares de las víctimas sienten que las investigaciones han disminuido desde la asunción al cargo del nuevo fiscal general. Dice el mismo Informe²²:

En agosto de 2017, el Fiscal General destituyó a varios de los miembros de la Dirección de Protección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, cuya función es investigar las violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad. La nueva directora no ha mostrado ningún resultado concreto en lo relativo a la investigación de las muertes relacionadas con las protestas. Su departamento no contaba tampoco con el personal suficiente. Al mismo tiempo, el Fiscal General desmanteló la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales, creada en 2014 para recolectar pruebas forenses en los casos en que miembros

de las fuerzas de seguridad fueran acusados de haber cometido violaciones de los derechos humanos. La directora de esa unidad y varios de sus expertos forenses huyeron del país tras recibir amenazas de muerte. Como resultado, el Ministerio Público perdió su capacidad para realizar exámenes forenses independientes en casos de violaciones a los DD.HH. supuestamente cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad.

Otra serie de denuncias por parte de los familiares de las víctimas contra la actuación del Ministerio Público se han incorporado al Informe²³:

Las fuerzas de seguridad, en particular la GNB, bloquearon los esfuerzos que estaban desplegando la Fiscal General anterior y su Oficina para identificar a los presuntos perpetradores. El ACNUDH conoció casos en los que las pruebas no se habían incorporado a los expedientes o habían desaparecido. También documentó casos en que miembros de las fuerzas de seguridad, presuntamente responsables de la ejecución extrajudicial de manifestantes, fueron liberados a pesar de ser objeto de órdenes judiciales de arresto o permanecieron simplemente retenidos en comisarías o cuarteles militares donde podían moverse libremente y no eran tratados como detenidos. En los pocos casos en que se identificó a los presuntos perpetradores de tales actos y se los privó de libertad, su procesamiento en los tribunales se retrasó injustificadamente.

La ANC, en agosto de 2017, creó la *Comisión para la verdad, la justicia, la paz y la tranquilidad pública*, cuya misión era “examinar e informar sobre la ‘violencia política’ cometida entre 1999 y 2017, centrándose particularmente en las protestas de 2014 y 2017”²⁴. Sin embargo, las personas contactadas por el ACNUDH reflejaron su desconfianza en dicha comisión por mostrar parcialidad a favor del Estado venezolano: “Todos los padres entrevistados optaron por no aceptar apoyo económico alguno mientras la investigación no estuviera concluida, y mientras el Gobierno no reconociera su responsabilidad por la muerte de sus familiares. Ninguno de los familiares entrevistados por el ACNUDH aceptó participar en las tareas de la Comisión de la Verdad”²⁵.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, que presuntamente era responsable de la mayoría de los homicidios cometidos durante las OLP, también estaba encargado de llevar a cabo los exámenes forenses relativos a todas las muertes violentas.

MUERTES EN EL CONTEXTO DE OPERACIONES DE SEGURIDAD NO RELACIONADAS CON LAS PROTESTAS

El uso excesivo de la fuerza se constituye en un problema que atenta la salvaguarda de los DD.HH. El ACNUDH²⁶:

... identificó un patrón de uso desproporcionado e innecesario de la fuerza, en ocasiones letal, seguido por las fuerzas de seguridad. De acuerdo a lo manifestado por los testigos, en varias ocasiones las muertes fueron encubiertas mediante la simulación de una resistencia armada por parte de las víctimas, lo cual ha obstruido cualquier intento de realizar una investigación imparcial y efectiva para esclarecer las muertes. En otros casos, se reportó que las fuerzas de seguridad manipularon la escena y evidencias para que las muertes parecieran haber resultado de intercambios de fuego.

Entre el año 2012 y el 2017 la tasa de homicidios pasó de 73 muertes violentas por cada 100 mil habitantes a 89 muertes violentas en el año 2017, lo cual significó 26 mil 616 muertes; un incremento de 4 mil 986 muertes violentas respecto al año 2012. Como indica el Informe, el Gobierno venezolano para tratar de frenar la ola delictiva en el país optó por intensificar la militarización de la seguridad ciudadana²⁷. Y a lo anterior se agrega que la seguridad ciudadana ha quedado en mano de militares de alto rango: “El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, el director de la PNB, el director del SEBIN y el director del CICPC eran oficiales de alto rango de las Fuerzas Armadas”²⁸.

También se menciona el despliegue de las denominadas Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP). Dice el Informe²⁹:

Desde julio de 2015, las autoridades estatales se han servido de las llamadas OLP como instrumento para demostrar sus pretendidos éxitos en materia de reducción de la criminalidad. El acnudh comprobó que existía un patrón de uso desproporcionado e innecesario de la fuerza por parte de los órganos de seguridad en dichas operaciones, las cuales se saldaron con un gran número de muertes que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. El Ministerio Público comprobó que, entre julio de 2015 y marzo de 2017,

las fuerzas de seguridad mataron a 505 personas en el marco de OLP, entre ellas 24 niños. Las OLP también se caracterizaban por el alto nivel de impunidad. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, que presuntamente era responsable de la mayoría de los homicidios cometidos durante las OLP, también estaba encargado de llevar a cabo los exámenes forenses relativos a todas las muertes violentas.

El informe señala dos sucesos que bien pudieran ser identificados como presuntos patrones de violación de DD.HH. como también de uso excesivo de la fuerza. Veamos lo que dice³⁰:

El patrón de violaciones a derechos humanos identificado en el marco de las OLP también se observó durante la operación que se saldó con la muerte de 39 reclusos en el centro de detención de Amazonas, en agosto de 2017, así como durante la operación que concluyó con la muerte de siete miembros de un presunto grupo armado en la zona de “El Junquito”, en enero de 2018. La información reunida por el ACNUDH indicó que en ambos casos los agentes de seguridad utilizaron fuerza excesiva y manipularon las escenas y evidencias para que las muertes parecieran haber resultado de los intercambios de fuego.

DETENCIONES ARBITRARIAS Y VIOLACIONES DEL DEBIDO PROCESO

El ACNUDH ha observado cómo las autoridades venezolanas han realizado detenciones arbitrarias e ilegales como herramienta para intimidar y reprimir a la oposición política o a cualquier persona percibida como una amenaza en contra del Gobierno por expresar disidencia o descontento.³¹ Para el ACNUDH es alarmante el número de activistas políticos y sociales, estudiantes, defensores de los DD.HH., trabajadores de los medios de comunicación social (MCS) y miembros de las fuerzas armadas, arbitrariamente detenidos.

Otro dato a ponderar en esta situación de las detenciones tiene que ver con la utilización de la justicia militar como la jurisdicción aplicada para conocer de los casos de personas civiles. A este respecto el ACNUDH ha señalado que “la aplicación de la justicia militar para juzgar a civiles implica graves violaciones del

El 21 de noviembre de 2017, un juez ordenó la puesta en libertad incondicional de los detenidos dado que nunca habían sido objeto de una orden de detención y no habían sido detenidos en flagrante delito. En el momento de redactarse este informe, no habían sido puestos en libertad.



LA PATILLA

derecho del acusado a un juicio justo, incluido el derecho a ser juzgado por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con arreglo a la legislación³². En continuidad con el informe del ACNUDH del año 2017, se mantiene la violación de las garantías del debido proceso³³ y, también hay que añadir la detención de menores de edad³⁴:

Los chicos fueron encarcelados en SEBIN Helicoide, junto con adultos, y privados de cualquier contacto con sus familias o abogados durante más de cuatro meses. Una familia recibió dos cartas, pero los padres dijeron que no estaban seguros de que su hijo las hubiera escrito. “No tenemos acceso a nada, estamos indefensos”, manifestaron. Ambos casos fueron denunciados ante la Dirección de Protección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el Consejo Nacional de Derechos del Niño y del Adolescente en vano. Los dos chicos fueron liberados condicionalmente el 1 de junio de 2018.

También personas colombianas fueron detenidas ilegalmente en el marco de las OLP³⁵:

El ACNUDH documentó el caso de 59 colombianos que fueron detenidos en varias operaciones de seguridad, partes de una OLP, llevadas a cabo en un lapso de varios días entre fines de agosto y principios de septiembre de 2016. Mientras les habían dicho que serían deportados, el Presidente Nicolás Maduro los acusó públicamente de pertenecer a fuerzas paramilitares colombianas. Todos fueron encarcelados en

el mismo calabozo precario de la policía, en condiciones extremadamente difíciles. No veían la luz natural y recibían muy poca comida, generalmente comían solo una vez al día. [...] El 21 de noviembre de 2017, un juez ordenó la puesta en libertad incondicional de los detenidos dado que nunca habían sido objeto de una orden de detención y no habían sido detenidos en flagrante delito. En el momento de redactarse este informe, no habían sido puestos en libertad.

TORTURA Y MALOS TRATOS

En el Informe el ACNUDH menciona que recibió relatos creíbles de personas privadas de su libertad expuestas a castigos crueles, inhumanos o degradantes, que pudieran ser tipificados como episodios de tortura, antes, durante y posterior a las manifestaciones del año 2017. Y como perpetradores de esos tratos crueles y degradantes, se menciona al Sebin, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y la GNB. En este mismo orden de ideas el ACNUDH documentó noventa casos de personas privadas de su libertad que habían sido sometidas a una o más formas de malos tratos o tortura. Los casos más graves generalmente ocurrieron en las instalaciones del Sebin, de la DGCIM y de las fuerzas armadas en todo el país. Algunas personas fueron detenidas en lugares de detención no oficiales.³⁶ Dichos tratos crueles comprendieron³⁷:

Descargas eléctricas, golpes fuertes –por ejemplo, con tubos de metal y bates de béisbol– violaciones y otras formas de violencia sexual, asfixia con bolsas de plástico y productos quími-

Hay una mención especial de la situación de los defensores de los DD.HH. quienes operan en un espacio civil cada vez más restringido. Estas personas, como sus organizaciones, han sido objeto de campañas difamatorias, amenazas, acoso, vigilancia, y hasta detenciones arbitrarias, malos tratos e incluso tortura, y todo por la defensa de los DD.HH.

cos, simulacros de ejecución y privación de agua. Los detenidos eran también sometidos a temperaturas frías y/o a luz eléctrica constante, eran esposados y/o se les vendaban los ojos durante largos períodos, y recibían amenazas de muerte e insultos.

En el Informe se mencionan las condiciones de detención de los privados de libertad. En todos los casos el hacinamiento fue considerado por sí mismo como un trato cruel y degradante. Los lugares de detención son insalubres, en algunos casos con poco acceso a la luz natural, con dificultades para el acceso a la alimentación y el agua potable. Con unos lugares de detención en paupérrimas condiciones la situación de salud de los detenidos se mantuvo en estado crítico. Las principales enfermedades padecidas fueron: problemas gástricos, úlceras, hipertensión, sarna y otras infecciones de la piel, tuberculosis e infecciones respiratorias de otra índole, malaria y VIH/SIDA.³⁸ Al precario estado de salud se añade los motines en los centros de reclusión que también exponían la vida de los privados de libertad por motivos políticos. Lastimosamente el ACNUDH observó que las víctimas expuestas a torturas y tratos crueles no denunciaron dichos actos por temor a sufrir represalias y “las denuncias que presentaron aquellas personas que reunían el valor para hacerlo rara vez fueron investigadas de manera eficaz. Ninguna de las quejas presentadas por malos tratos o tortura documentados por el ACNUDH, incluyendo las del informe de 2017, habían mostrado resultados o ni siquiera progresos”³⁹.

ATAQUES CONTRA OPOSITORES POLÍTICOS, ACTIVISTAS SOCIALES Y DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS

Sobre este hallazgo se dice que en el año 2017 y los primeros meses de 2018 diversos líderes de partidos políticos de la oposición, activistas sociales y defensores de DD.HH. fueron acusados públicamente de actos de terrorismo, traición a la patria y otros delitos graves, además de sufrir acoso, estigmatización, intimidaciones, amenazas y agresiones físicas, detenciones arbitrarias, malos tratos o tortura, enjuiciamiento penal sin fundamento.

En este apartado se incluyen las medidas represivas en contra de representantes electos de los partidos políticos de oposición. Y, no se dejan por fuera

a estudiantes, profesores universitarios y otros líderes sociales que también sufrieron persecución estatal. Hay una mención especial de la situación de los defensores de los DD.HH. quienes operan en un espacio civil cada vez más restringido. Estas personas, como sus organizaciones, han sido objeto de campañas difamatorias, amenazas, acoso, vigilancia, y hasta detenciones arbitrarias, malos tratos e incluso tortura, y todo por la defensa de los DD.HH.⁴⁰

VIOLACIONES A LA LIBERTAD DE OPINIÓN Y EXPRESIÓN

El ACNUDH detectó que los ataques a los MCS, a los periodistas y otros trabajadores de los MCS se intensificaron durante la ola de protestas del año 2017 y continúan en lo que va del presente año. Dice el Informe que:

...aunque un porcentaje importante de las violaciones documentadas guardaron relación directa con las manifestaciones y su cobertura; los trabajadores de los MCS que se ocupan de investigar la situación alimentaria y de salud, las condiciones carcelarias o la corrupción también han sido víctimas de acoso, intimidación, ataques y detención arbitraria⁴¹.

Del Informe se concluye que la actividad periodística y de los MCS es altamente vigilada por los contenidos y opiniones emitidos por sus representantes.

Aunque la restricción a la distribución de papel para los medios impresos no es una amenaza directa, en el Informe se considera que dicha práctica del ente gubernamental respectivo, representa una lesión al derecho de la libertad de expresión porque vulnera el acceso a la información que tienen todos los venezolanos. El cierre de canales de TV, de cadenas de radio y de medios impresos puede catalogarse como una vulneración del derecho a la libertad de opinión y expresión.⁴²

VIOLACIONES AL DERECHO AL MÁS ALTO NIVEL POSIBLE DE SALUD

En el país se ha reseñado la crisis del sector salud y el Informe se hace eco de esa situación tan dramática: aumento de la mortalidad materna e infantil, falta de acceso a tratamientos adecuados y regulares para pacientes con enfermedades crónicas, brotes de paludismo y difteria (enfermedades erradicadas en el país),

Las mujeres son las más afectadas por la situación de la falta de alimentos, porque ellas son quienes dejan de comer para apaciguar el hambre de sus hijos, y además son las que hacen las colas para la adquisición de los alimentos.

lo cual es la manifestación, entre otras cosas, de la reducción del presupuesto asignado al Ministerio de salud⁴³ y no se puede dejar de mencionar el silencio por parte de dicho Ministerio en divulgar los boletines epidemiológicos y así constatar la situación sanitaria en el país.⁴⁴

Además, se menciona que el programa social, bandera del Gobierno venezolano, *Misión barrio adentro*, colapsó porque su financiamiento dependía exclusivamente de los ingresos petroleros, y a lo anterior se suma la falta de institucionalización y control, lo cual transformó la Misión en un programa ineficiente y con una cobertura vista en una drástica disminución de atención pasando en el año 2015 de 2,6 mm de personas atendidas a 200 mil en 2017.⁴⁵

Otro factor que suma al mencionado deterioro del sistema de salud nacional es la dependencia de las importaciones de medicamentos y equipos sanitarios, lo cual ha provocado una escasez sistemática. Además de la escasez de insumos se agrega la emigración de médicos y enfermeras, principalmente debido a los bajos salarios. También se debe sumar el deplorable estado de las instalaciones hospitalarias y públicas (escasez de insumos médicos y medicamentos, quirófanos contaminados, ausencia de personal, fallas en el suministro de energía eléctrica y agua potable, falta de reactivos). Visto lo anterior se comprende la magnitud de la tragedia nacional respecto al sistema de salud público.⁴⁶

El deterioro mencionado se agudiza por la corrupción desenfrenada e inescrupulosa que ha incentivado el fortalecimiento de un mercado “alterno” para la obtención de medicamentos e insumos médicos. Por ejemplo, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales ha limitado, desde 2015, la adquisición de tratamientos de alto costo, poniendo en vilo la vida de al menos 300 mil pacientes (con insuficiencias renales, con VIH/SIDA, con cáncer) que viven con enfermedades crónicas; estas personas se han visto afectadas porque no reciben los medicamentos o están disponibles a unos costos tan elevados que no pueden ser adquiridos.⁴⁷

VIOLACIÓN AL DERECHO A UNA ALIMENTACIÓN ADECUADA

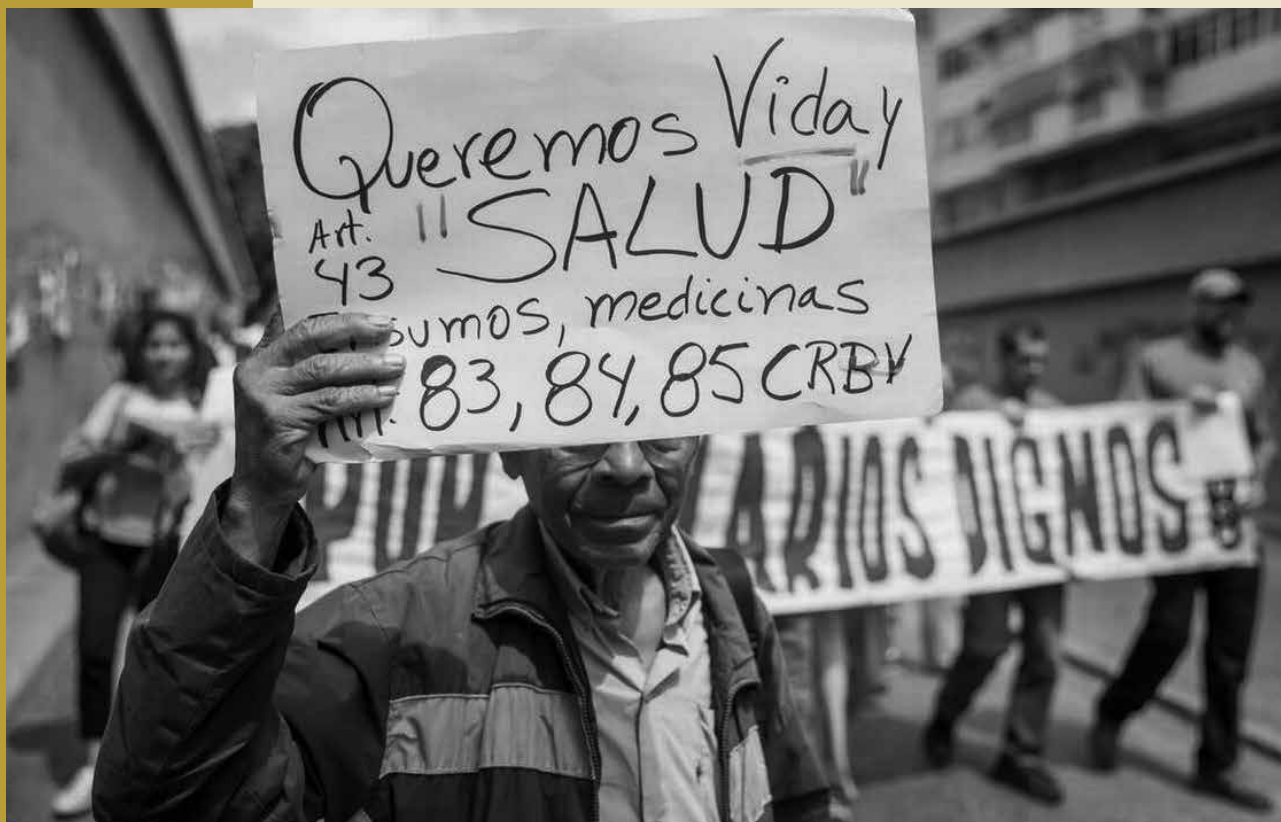
El derecho a la alimentación se vulnera cuando los ciudadanos, bien por ellos mismos o en colaboración con otros, tienen acceso restringido a una alimen-

tación adecuada o a los medios para conseguirla. Este derecho se ha visto afectado por la recesión económica, la hiperinflación y la pérdida del poder adquisitivo, sumado al desmantelamiento del sistema de producción nacional de alimentos, la expropiación y nacionalización de empresas privadas del rubro alimenticio, el control cambiario y agrícola y la dependencia de las importaciones de alimentos.⁴⁸ La falta de disponibilidad de alimentos en los mercados también se ha producido porque el Gobierno nacional, desde octubre de 2016, ha obligado a las empresas productoras de alimentos a venderle a precio fijo el 50 % de su producción que se entregaba para el abastecimiento de las cajas CLAP, y desde octubre de 2017 la cuota aumentó al 70 % de la producción requerida por el Estado nacional.⁴⁹ Para tratar de disminuir la brecha respecto al acceso a los alimentos, el Gobierno nacional autorizó la importación de estos utilizando el dólar paralelo lo cual repercutió en los precios. Aunque se podían conseguir los alimentos en los supermercados, los costos resultaron inaccesibles para la mayoría de los venezolanos⁵⁰, tanto que la población ha cambiado sus hábitos alimenticios, o simplemente pasa horas en largas colas para comprar alimentos a los precios regulados por el Estado.

Una mención particular debe hacerse del riesgo de malnutrición y desnutrición al que se encuentran expuestos ancianos, mujeres embarazadas y niños. Las mujeres son las más afectadas por la situación de la falta de alimentos, porque ellas son quienes dejan de comer para apaciguar el hambre de sus hijos, y además son las que hacen las colas para la adquisición de los alimentos.

Para culminar, el informe hace una observación importante sobre la dramática situación que viven los venezolanos a propósito del derecho a la alimentación:⁵¹

El ACNUDH constató que, dado que el Gobierno se negó a reconocer la magnitud de la crisis sanitaria y alimentaria, no se habían adoptado las medidas y las reformas normativas que se necesitaban con urgencia para hacer frente a la crisis y sus causas fundamentales, no cumpliendo así su obligación internacional de hacer todo lo posible para asegurar el ejercicio de los derechos a la salud y la alimentación, incluso recurriendo a la cooperación y asistencia internacionales.



EL NUEVO HERALD

De la crisis sanitaria y alimentaria el ACNUDH solicita que el Gobierno adopte medidas efectivas para abordar la crisis sanitaria y alimentaria, búsqueda de ayuda de las distintas agencias de la ONU para afrontar las necesidades urgentes de las poblaciones en situación de vulnerabilidad...

RECOMENDACIONES

El Informe ofrece una serie de recomendaciones al Estado venezolano con el objetivo de abordar las violaciones a los DD.HH. y se prevengan más violaciones.⁵²

Lo primero es monitorear constantemente la situación venezolana por parte del Consejo de DD.HH. de la ONU para evitar un mayor deterioro de los DD.HH., adoptando medidas apropiadas para tal fin. Y, lo segundo, es pedir al Gobierno nacional conceder acceso directo y sin restricciones al ACNUDH para evaluar de manera integral la situación de los DD.HH. en el país.

Para disminuir el uso excesivo de la fuerza y la muerte de ciudadanos se pide que los órganos de seguridad tomen medidas pertinentes para evitar la violación de los DD.HH., y cooperar para que los responsables de estas violaciones sean llevados a los tribunales competentes. Al Ministerio Público se le recomienda establecer nuevamente la Unidad Criminalística contra la Vulneración de los Derechos Fundamentales, y que se den a conocer los resultados de las investigaciones relativas a las muertes ocurridas durante las manifestaciones en 2017.

De las detenciones arbitrarias y debido proceso se señala que: a) los órganos de seguridad deben cumplir con las órdenes judiciales de liberación de detenidos, b) poner fin a las detenciones arbitrarias y liberar a las personas injustamente privadas de libertad, c) garantizar que familiares y abogados tengan acceso a las personas detenidas, d) prevenir el retraso injustificado de los procedimientos judiciales, e) las autoridades competentes deben proteger a los abogados defensores de los presos políticos de cualquier tipo de intimidación, f) se debe frenar la aplicación de la jurisdicción militar a los civiles.

Las recomendaciones referidas a la tortura, malos tratos y condiciones de detención son: condenar públicamente cualquier caso de tortura y malos tratos; el Ministerio Público debe investigar de manera efectiva e independiente cualquier denuncia de casos de tortura y malos tratos; abordar las condiciones de detención de los privados de libertad, en particular el hacinamiento, la violencia, la falta de acceso a alimentos y asistencia médica; ratificar el Protocolo facultativo de la convención contra la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes.

Para disminuir el uso excesivo de la fuerza y la muerte de ciudadanos se pide que los órganos de seguridad tomen medidas pertinentes para evitar la violación de los DD.HH., y cooperar para que los responsables de estas violaciones sean llevados a los tribunales competentes.

En el caso de los ataques y restricciones del espacio democrático, se recomienda: respetar a los miembros de los partidos políticos de la oposición política, se debe levantar cualquier restricción que limita los derechos de libertad de expresión, asociación y de reunión.

De la crisis sanitaria y alimentaria el ACNUDH solicita que el Gobierno adopte medidas efectivas para abordar la crisis sanitaria y alimentaria, búsqueda de ayuda de las distintas agencias de la ONU para afrontar las necesidades urgentes de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, dar a conocer la situación real de la situación alimentaria y sanitaria en el país, buscar ayuda en sectores de la sociedad civil para asesorar sobre las reformas económicas y sociales en el país.

Por último, de las reformas institucionales y de políticas relativas al sistema de justicia y el Estado de derecho se recomienda: seguir lo pautado en la Constitución nacional para la escogencia del fiscal general y el defensor del pueblo, abordar la criminalidad en el país a través de un enfoque de DD.HH., adoptar un plan para poner fin a la participación de las fuerzas militares en las funciones de seguridad pública, así como la desmilitarización de los cuerpos policiales, buscar la independencia del Poder Judicial y la revisión del sistema de justicia penal.

* Director SJR-Venezuela.

NOTAS:

- 1 De ahora en adelante el Informe.
- 2 Cf. Informe, p. 1.
- 3 ACNUDH., Violaciones y abusos de los derechos humanos en el contexto de las protestas en la República Bolivariana de Venezuela del 1 de abril al 31 de julio de 2017. Resumen Ejecutivo, ii.
- 4 Ídem.
- 5 Cf. Ídem, p. 1.
- 6 Informe, p. 1.
- 7 Cf. Informe, p. 1.
- 8 Ver en: <http://mppre.gob.ve/comunicado/venezuela-rechaza-politizado-informe-del-alto-comisionado-de-la-onu-para-los-derechos-humanos/> (Consultado el 09-07-18).
- 9 Ver en: <http://mppre.gob.ve/comunicado/venezuela-rechaza-politizado-informe-del-alto-comisionado-de-la-onu-para-los-derechos-humanos/> (Consultado el 09-07-18).
- 10 Ver en: <https://news.un.org/es/story/2018/06/1436542> (Consultado el 09-07-18).
- 11 Cf. Informe, notas 2 y 3, p. 2.
- 12 Ídem, p. 2.
- 13 Ver en: <http://mppre.gob.ve/comunicado/venezuela-rechaza-politizado-informe-del-alto-comisionado-de-la-onu-para-los-derechos-humanos/> (Consultado el 09-07-18).
- 14 Ver en: <https://www.diariolasamericas.com/america-latina/venezuela-rechaza-informe-la-onu-su-situacion-ddhh-n4154422> (Consultado el 09-07-18).
- 15 Ver en: <http://www.cubavtr.icrt.cu/venezuela-critican-informe-de-alto-comisionado-de-dd-hh/> (Consultado el 09-07-2018).
- 16 <http://revistacaracola.com.ve/alfred-de-zayas-informe-del-alto-comisionado-de-ddhh-de-la-onu-sobre-venezuela-carece-de-credibilidad/> (Consultado el 09-07-2018).
- 17 Informe, p. 6.
- 18 Informe, p. 7.
- 19 Informe, Resumen Ejecutivo, ii.
- 20 Informe, p. 9.
- 21 Informe, p. 9-10.
- 22 Informe, p. 10.
- 23 Informe, Resumen Ejecutivo, ii.
- 24 Informe, p. 13.
- 25 Informe, p. 14.
- 26 Informe, p. 15.
- 27 Informe, p. 16.
- 28 Informe, pie de página 86, p. 16.
- 29 Informe, Resumen Ejecutivo, iii.
- 30 Informe, Resumen Ejecutivo, iii.
- 31 Informe, p. 24-25.
- 32 Informe, p. 25.
- 33 Informe, p. 26.
- 34 Informe, p. 27.
- 35 Informe, p. 29.
- 36 Informe, p. 31.
- 37 Informe, p. 32.
- 38 Informe, p. 33.
- 39 Informe, p. 35.
- 40 Informe, p. 36; 38-39.
- 41 Informe, p. 41.
- 42 Informe, p. 41-42.
- 43 Informe, p. 44.
- 44 Informe, p. 49.
- 45 Informe, p. 45.
- 46 Informe, p. 45.
- 47 Informe, p. 46.
- 48 Informe, p. 50.
- 49 Informe, p. 51.
- 50 Informe, p. 52.
- 51 Informe, Resumen ejecutivo, vi.
- 52 Informe, p. 58.